Cooperativa del Campo y Crédito «Nuestra Señora del Rosario», de Revenga de Campos (Palencia).

Cooperativa Avícola y Caja Rural «Sur de Tenerife», de Granadilla de Abona (Tenerife).

Cooperativas Industriales:

Cooperativa Industrial Textil «San José Obrero», de Alcoy (Alicante).

Cooperativa del Comercio al Detalle de la Alimentación «San Miguel», de Altura (Castellón).

Cooperativa de Construcción e Industria «Nuestra Señora de la Cabeza», de Jaén.

Cooperativa de Herreros Rurales, Talleres Mecánicos y Talleres de Reparación de Automóviles de Cervera y Comarca, en Cervera (Lérida).

Cooperativa Minera del Bajo Segre, de Granja de Escarpe (Lérida).

Cooperativa de Instaladores, Fontaneros y Electricistas, de Reus (Tarragona).

Cooperativa Industrial «Luján Pérez», de Santa Cruz de Tenerife.

Cooperativas de consumo:

Cooperativa de Consumo y Crédito «San José», de Palencia.

Cooperativa de Consumo «Santa Eulalia», de Mataporquera (Santander).

Cooperativas de Crédito:

Cooperativa Caja Rural «Nuestra Señora del Socorro», de Rociana del Condado (Huelva).

Cooperativa de Crédito Caja Rural «Criceas», de Valladolid.

Cooperativas del Mar:

Cooperativa del Mar de Pesca de Altura, de Puerto de Ondárroa (Vizcaya).

Cooperativas de Viviendas:

Cooperativas de Viviendas «Ròda de Ter», de Roda de Ter (Barcelona).

Cooperativa de Viviendas «Nuestra Señora de Guadalupe», de Fuenterrabía (Guipúzcoa).

Cooperativa de Viviendas «Fray Juan de Zumárraga», de Durango (Vizcaya).

Cooperativa de Casas Baratas «La Unión», de Sestao (Vizcaya).

Cooperativa de Viviendas «San Pedro Mártir», de Doña Mencía (Córdoba).

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 8 de noviembre de 1960.—P. D., Cristóbal Graciá.

Ilmo. Sr. Director general de Previsión.

* * *

ORDEN de 9 de noviembre de 1960 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Altos Hornos de Vizcaya, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 9 de junio del corriente año en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Altos Hornos de Vizcaya, S. A.», sobre clasificación profesional de un productor,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimando la alegación de inadmisibilidad y el recurso interpuesto por «Altos Hornos de Vizcaya, Sociedad Anónima», contra la Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1959, clasificando a don Vicente Laborda como Contramaestre en el servicio de aquella empresa, debemos declarar y declaramos la validez en derecho de la Orden recurrida y absolvemos a la Administración de la demanda.—Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Alejandro Gallo.—José Arias.—

José María Cordero.—Ignacio María Sáenz de Tejada.—Manuel Docavo.—Rubricados.»

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 9 de noviembre de 1960.

SANZ ORRIO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

* * *

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 14 de noviembre de 1960 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 9.391, interpuesto por don Federico Platard de Quenín y Oller.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 9.391, seguido en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo entre don Federico Platard de Quenín y Oller, demandante, y la Administración General del Estado, demandada, contra Orden de este Ministerio de 26 de diciembre de 1957, se ha dictado con fecha 22 de abril último sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de don Federico Platard de Quenín y Oller contra la Orden ministerial de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, confirmatoria de la Resolución dictada por la Dirección General de Minas de quince de abril anterior, debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad de los recursos acumulados al anterior; todo ello sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas cuasadas en este procedimiento, y devuélvase el expediente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 14 de noviembre de 1960.

PLANELL

Ilmo. Sr. Subsecretario de Industria.

* * *

ORDEN de 14 de noviembre de 1960 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo promovido por «Chocolat Suchard, S. A.».

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 717, seguido en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo entre «Chocolat Suchard, S. A.», demandante, y la Administración General del Estado, demandada, contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1958, se ha dictado con fecha 5 de octubre último sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que no dando lugar al recurso establecido por «Chocolat Suchard, S. A.», de Neuchâtel (Suiza), contra la Orden del Ministerio de Industria (Registro de la Propiedad Industrial) de veinte de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, que concedió la marca número trescientos veintisiete mil setecientos diecisiete, «Camay», a don Juan y don José Rimblas Rey, debemos declarar y declaramos válida y subsistente, por conforme a derecho, la citada Orden impugnada, sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido